



Valledupar, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Referencia: Proceso ejecutivo de menor cuantía.

Demandante: CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO NIT:
900.515.759-7.

Demandado: FILOMENA MARIA AHUMADA ACOSTA. C.C. 49.774.808.

Radicado: 200014003003 2015 00430 00.

I.ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a Dictar sentencia en el proceso EJECUTIVO, adelantado por la CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO, a través de apoderado judicial, contra la señora FILOMENA MARIA AHUMADA ACOSTA.

PRETENSIONES:

El demandante, a través de apoderado judicial solicitó a este Despacho Judicial se libre mandamiento ejecutivo a favor de CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO y a cargo de la demandada teniendo como título base para la ejecución el pagare N° 49.774.808 del 20 de agosto de 2013, por las siguientes cantidades:

1. Por la suma de \$1.808.242,00, por concepto de capital insoluto contenido en el mencionado pagare.
2. Por los intereses moratorios desde el 15 de abril de 2015, hasta la fecha en que se satisfagan las pretensiones.
3. Que se condene en costas al demandado.

Las anteriores pretensiones, se fundamentan en los siguientes

ANTECEDENTES

Que, la señora FILOMENA MARIA AHUMADA ACOSTA en calidad de deudora se obligó a pagar a la orden de CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO la suma de Un Millón Ochocientos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos M/cte (\$1.808.242), obligándose a pagar el día 14 de abril de 2015, conforme a la obligación garantizada en el pagaré N° 49.774.808 otorgado el 20 de agosto de 2003.

Que a la fecha de presentación de la demanda la señora FILOMENA MARIA AHUMADA ACOSTA adeuda la totalidad de la obligación.

El veinticuatro (24) de junio de 2015 se libró mandamiento de pago ordenando notificar a la demandada (fl 12).

Mediante auto del siete (7) de septiembre de 2017, y luego de que la parte demandante manifestara desconocer otra dirección donde notificar a la ejecutada,



el despacho ordenó emplazar a la señora Filomena María Ahumada Acosta expidiendo el edicto correspondiente para que el demandante cumpliera con la carga procesal que le correspondía, lo cual hizo el 05 de agosto del año 2018 (fl 36) y allegó constancia de ello al expediente mediante memorial recibido el 26 de septiembre de 2018.

Por auto del treinta (30) de julio de 2019, se dispuso a nombrarle curador a la señora Filomena María, designando para tal oficio a la abogado Gustavo Solano Fernández.

El 10 de diciembre de 2019 el curador ad litem designado a la señora Filomena Ahumada, procedió a dar contestación de la demanda proponiendo la siguiente excepción: Excepción contra la acción cambiaría por Prescripción del título valor.

DE LA EXCEPCION.

- EXCEPCIÓN CONTRA LA ACCIÓN CAMBIARÍA POR PRESCRIPCIÓN DEL TÍTULO VALOR, explica que el título valor utilizado para el recaudo tiene como fecha de vencimiento el 14 de abril de 2015, y de la cual se presentó demanda ejecutiva el 25 de mayo de 2015, librando mandamiento ejecutivo este despacho el 24 de junio de 2015 y publicado el auto por estado del 25 de junio de esa misma anualidad.

Según el artículo 94 del C.G.P., el demandante contaba con un año a partir del día siguientes de la notificación de la providencia, es decir, hasta el 25 de junio de 2016, termino en el que no se llevó a cabo la notificación personal ni se lo solicitó el emplazamiento del demandado a notificar, sino que, hasta el 28 de febrero de 2017, fue que la parte demandante solicitó el emplazamiento de la demandada, sin embargo, para ese momento el título valor ya se encontraba prescrito.

Por lo anterior, solicita que se declare probada la excepción propuesta y se dé por terminado el proceso y el levantamiento de las medidas cautelares junto con el archivo del proceso.

A su traslado la parte demandante señaló:

“...no prospera la excepción de prescripción de la obligación cambiaria de los títulos valores objeto del cobro judicial, como quiera que la parte demandante referente a la carga procesal que le asiste de notificación cumplió a cabalidad con la etapa de notificación personal de la demandada, que para garantizar su cumplimiento se realizó en tres diversas ocasiones el envío de la citación de notificación personal por la empresa de mensajería certificada, las cuales fueron allegadas al despacho con el reporte del correo en devolución por causales como no reside, desconocido, rehusado, no reclamado, dentro del año establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso, sin tener en cuenta el periodo de vacancia judicial, ceses de actividades y fecha del día de la publicación en estados del mandamiento de pago.



En esta medida, la demora en el trámite de notificación NO obedece a la negligencia o desidia del demandante, por cuanto se ha realizado una normal actividad para que se logre surtir esta etapa, mucho menos puede decirse que eso favorece la demandada dentro del proceso, pues se vulnera uno de los elementos que integran el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 CP).

Conforme a lo preceptuado en la sentencia del día 20 de Septiembre de 2000, expediente 5422, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Jose Fernando Ramirez Gomez , señalo, Textualmente “partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la negligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de esta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de la paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiado al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad”.

PROBLEMA JURIDICO

Teniendo en cuenta el anterior panorama, en el cual se resume la posición de las partes, el problema jurídico que ha de resolverse a través de esta providencia es sí, ¿Hay lugar a ordenar seguir adelante la ejecución en este asunto, o si por el contrario no hay lugar a ello por haber operado el fenómeno de la prescripción del derecho a ejercer la acción cambiaria derivada del pagaré objeto de recaudo?

PRUEBAS

Se tuvieron como pruebas las aportadas por las partes con la demanda, la contestación y los escritos de excepciones las siguientes:

Del demandante.

- Pagaré N° 49.774.808 otorgado el 20 de agosto de 2003

Del demandado.

- Las obrantes en el expediente



CONSIDERACIONES

En aras de que prevalezca la celeridad y la economía procesal, el Juzgado procede a dar aplicación al artículo 278 numeral 2 del CGP el cual establece que cuando no hubiere pruebas por practicar el Juez de oficio podrá dictar sentencia anticipada por escrito.

Ahora bien, valga decir prima facie que, dentro del trámite no se observan irregularidades o vicios que pudieran producir nulidad total o parcial de lo actuado y que deban ser declaradas de oficio o puestas en conocimiento de las partes. Se garantizaron el debido proceso, la garantía del derecho de defensa y la contradicción de la prueba.

Además, en la suscrita no concurre causal alguna de impedimento para fallar el fondo y no hay incidentes o cuestiones accesorias pendientes de resolver, y los presupuestos procesales exigidos por la ley para la validez formal y existencia del proceso, como son la competencia, capacidad para ser parte, capacidad procesal, y demanda en legal forma, háyanse estructurados; por lo que el Juzgado no se detiene en su análisis, pues de faltar alguno de ellos sería procedente su estudio.

Para el caso en concreto es menester distinguir dos aspectos en materia de procesos ejecutivos, el primero, la existencia de los requisitos para proferir mandamiento de pago de conformidad con el artículo 422 del C.G.P, verificándose para ello si realmente se cumplen o no los requisitos previstos con ocasión a la función oficiosa de control de legalidad de la ejecución y segundo, lo concerniente a las excepciones perentorias propiamente dichas.

Es conducente anotar que el título ejecutivo debe contener una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética, si se trata de pagar una suma de dinero”. Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a suposiciones. La obligación es clara cuando además de expresa, aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. Finalmente, es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se debe a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición.

Ahora, en lo que respecta a la excepción de mérito, están definidas en todo hecho que pueda desconocer la existencia de la obligación o declarar extinguida si alguna vez existió, ya sea de manera temporal y perpetua, las que desconocen la existencia de la obligación, es decir que este viciada por nulidad, dolo, error, fuerza,



simulación, y las que declaran extinguidas la obligación, ya sea, por pago, compensación, novación, transacción, entre otros.

En el presente asunto, el curador *ad-litem* designado para representar la parte demandada propuso la excepción de mérito denominada EXCEPCIÓN CONTRA LA ACCIÓN CAMBIARÍA POR PRESCRIPCIÓN DEL TÍTULO VALOR respecto de la cual entrará el despacho a pronunciarse seguidamente.

Respecto a la procedibilidad de la excepción planteada, es conveniente resaltar el concepto de Prescripción, el cual consiste en un fenómeno jurídico a través del cual se adquieren o se extinguen derechos y obligaciones por el paso del tiempo. En el presente caso, la parte ejecutada por intermedio de su curador *ad litem* pretende que se declare la ocurrencia de la prescripción, es decir se declare extinguido el derecho de ejercer la acción cambiaria que faculta al acreedor para exigirle el cumplimiento de la obligación contenida en el título ejecutivo base de este proceso.

La acción cambiaria las clasifica el artículo 781 del Código de Comercio, como directas y de regreso, cuando dispone:

“La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado”.

A su turno, el artículo 789 del Código de Comercio enseña que *“La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”.*

Con fundamento en lo anterior, para que opere el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción derivada del Pagaré base de la ejecución, debe probarse que la acción va dirigida contra el aceptante del título, o sus avalistas, situación que se desprende claramente en la demanda, y que han transcurrido más de tres años desde que la acción cobró exigibilidad.

Al analizar con rigor la actuación, se tiene que el problema jurídico planteado se centra en determinar si la prescripción extintiva de la obligación se produjo en el presente asunto, extinguiendo la obligación, materia de recaudo ejecutivo.

Al respecto conviene precisar que el Pagaré base de recaudo ejecutivo en este asunto, tiene como fecha de creación, el día 20 de agosto de 2003 y como fecha de vencimiento el día 14 de abril de 2015, lo que implica que la prescripción se produciría el 14 de abril de 2018, siempre y cuando no se hiciera uso de la cláusula aceleratoria contenida dentro del pagare objeto de ejecución.

Los términos prescriptivos aplicables a este asunto se encuentran establecidos en los artículos 789 a 791 del C.Co.

“ARTICULO 789. <PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA>. La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento.



ARTICULO 790. <PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DE REGRESO DEL ÚLTIMO TENEDOR>. *La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en un año contado desde la fecha del protesto o, si el título fuere sin protesto, desde la fecha del vencimiento; y, en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación.*

ARTICULO 791. <ACCION DEL OBLIGADO DE REGRESO CONTRA OBLIGADOS ANTERIORES>. *La acción del obligado del regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en seis meses, contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha en que se le notifique la demanda.”*

La demanda fue presentada, el 22 de mayo de 2015, buscando con esto la parte demandante interrumpir el término de prescripción de la obligación, en base en el inciso primero del Art. 90 del C.P.C., el cual señala que:

“ARTÍCULO 90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.”

En ese sentido se libró mandamiento de pago el 24 de junio de las mismas calendas. Este auto se notificó por estado al demandante el día 26 de junio del mismo año. Seguidamente, y como quiera que no fue posible lograr la notificación personal de la demandada, el apoderado de la parte demandante solicitó el emplazamiento de la misma, para terminar con el posterior nombramiento de curador *ad-litem* el cual fue notificado y posesionado el 26 de noviembre de 2019; por lo dicho, desde la notificación del auto que libró mandamiento de pago en contra de la demandada, hasta la notificación y posesión del curador *ad-litem*, había transcurrido más del año contemplado por el artículo 90 del C.P.C. para que opere la interrupción de la prescripción, y teniendo en cuenta que el curador que actúa en representación de los demandados se notificó después de transcurridos los tres años establecidos para que el título valor en mención prescriba, el despacho deberá declarar que, el derecho a ejercer la acción cambiaria derivada del pagaré base de recaudo se encuentra prescrito.

Por todo lo antes expuesto, se declarará probada la excepción de mérito denominada, PRESCRIPCION DE LA ACCION y, en consecuencia, se dará por terminado el presente proceso.



En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, administrando justicia y en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar Probada la EXCEPCIÓN CONTRA LA ACCIÓN CAMBIARÍA POR PRESCRIPCIÓN DEL TÍTULO VALOR propuesta por el curador ad-litem, y por las razones esgrimidas en la parte motiva de la presente.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, decretar la terminación del proceso de la referencia.

TERCERO: Levántense las medidas cautelares que pesan en contra de las demandadas. Envíense las comunicaciones que sean necesarias.

CUARTO: Condenar en costas a la demandante CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO. Por Secretaria Tásense.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

Firmado Por:

CLAURIS AMALIA MORON BERMUDEZ

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL VALLEDUPAR

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

1f24210a0982addb615e45a4f6247da79362beda1a508a053f19c8104323be17

Documento generado en 27/05/2021 11:47:52 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>